



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, 19 107 120

Auto Interlocutorio No. 169

MAGISTRADO PONENTE: OMAR EDGAR BORJA SOTO

MEDIO DE CONTROL:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - LABORAL
EXPEDIENTE:	76001-33-33-011-2017-00001-01
DEMANDANTE:	MIGUEL ANGEL AVELLANEDA VEGA
DEMANDADO:	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES - CREMIL
ASUNTO	CONFIRMA AUTO

Proyecto discutido y aprobado en Sala de Decisión de la fecha (Acta No. _____)

I. OBJETO DE LA DECISION

Se procederá a resolver el recurso apelación, propuesto por la parte demandante, contra el auto interlocutorio No. 576 del 05 de septiembre de 2019, proferido dentro de la audiencia inicial por el Juzgado 11 Administrativo Oral de Cali, mediante el cual se declaró probada la excepción de cosa juzgada propuesta por la entidad demandada.

II. ANTECEDENTES

En ejercicio del medio de control consagrado en el artículo 138 del CPACA y actuando a través de apoderada judicial, el señor MIGUEL ANGEL AVELLANEDA VEGA demandó a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares - CREMIL y solicitó¹ la nulidad del Oficio No. CREMIL 80843 consecutivo 2016-64351 del 27 de septiembre de 2016, que negó el reajuste de la asignación mensual de retiro desde 1997 hasta septiembre de 2003.

A título de restablecimiento del derecho solicitó se realice el reajuste y el pago de los dineros dejados de percibir.

III. DE LA PROVIDENCIA APELADA:

Mediante auto interlocutorio No. 576 del 05 de septiembre de 2019, el Juzgado 11 Administrativo Oral de Cali, resolvió declarar probada la excepción de cosa juzgada propuesta por la entidad demandada y la terminación del proceso.

¹ Ver folios 21 a 22

Consideró que, la parte actora adelantó un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, con radicación No. 76001-33-31-014-2008-00385-00 en contra de la misma entidad, donde solicitó la nulidad del Oficio No. 48929 CREMIL 66666 del 18 de diciembre de 2008 y en consecuencia se ordenara el reajuste de su asignación de retiro conforme al IPC desde el 01 de enero de 1997, acción a la cual se accedieron las pretensiones de la demanda y se dio cumplimiento mediante resolución No. 2016 del 19 de abril de 2011. Transcribió apartes de la sentencia del 23 de septiembre de 2010 del Juzgado 14 Administrativo Oral de Cali.

Explicó que, la parte actora sostiene en el escrito de la demanda que el Juzgado 14 Administrativo Oral de Cali incurrió en un yerro jurídico en la sentencia proferida argumentando la indebida aplicación en la prescripción; sin embargo el Despacho advirtió que el demandante tenía la oportunidad de interponer los recursos frente a la cuestionada sentencia.

Consideró que del contenido de las pretensiones y los fundamentos fácticos que dieron origen al fallo proferido por el Juzgado 14 Administrativo Oral de Cali, se tiene que, presenta identidad de partes, objeto y causa petendi, por lo que el asunto no es susceptible de control judicial.

IV. FUNDAMENTOS DEL RECURSO:

Inconforme con la decisión, el apoderado judicial de la parte demandante interpone recurso de apelación manifestando que con la decisión proferida se incurrió en un defecto sustantivo debido a una interpretación errada de la excepción de cosa juzgada al no existir la identidad de objeto ni de causa, los cuales son similares mas no iguales, debido a que el acto administrativo demandado en sentencia 189 del 23 de septiembre de 2010 es el CREMIL 48929 No. 66666 del 18 de diciembre de 2007 y el demandado en la presente Litis es el acto administrativo No. 80843 consecutivo 2016-64351 del 27 de septiembre de 2016, son actos administrativos diferentes.

Las pretensiones del proceso anterior, se referían a la reliquidación del IPC del año 1997 hasta el 2006 y en el presente caso se refieren es a la reliquidación con base en el IPC del año 2003 hasta la fecha de su cumplimiento.

Transcribió apartes de la sentencia de la Sección Primera del Consejo de Estado, C.P. Roberto Augusto Cerrato Valdes, expediente 11001031500020160047100 del 08 de junio de 2016, donde no se configura la cosa juzgada por no existir identidad de objeto ni de causa.

"En lo relativo al petitum se tiene que no obstante en ambos procesos el accionante solicitó a CASUR pronunciarse sobre su ajuste de sus asignación de retiro con base al IPC de conformidad con el artículo 14 de la Ley 100 de 1993 y la ley 238 de 1995, por el año 1997 en adelante, lo cierto es que se pide que se

declare la nulidad de actos administrativos diferentes y en tal virtud la parte resolutive de la sentencia no puede ser la misma.”.

Igualmente refirió apartes de la sentencia de tutela de la Sección Segunda del Consejo de Estado, C.P. Gabriel Valbuena Hernández, expediente No. 11001031500020170192100 del 11 de septiembre de 2017, donde no se configura la cosa juzgada prevaleciendo el derecho sustancial y la protección de los derechos fundamentales.

“De la anterior revisión la Sala observa que en el caso en estudio no puede predicarse que el petitum de los dos procesos sea idéntico, como lo exige la jurisprudencia teniendo en cuenta dos aspectos que tienen toda la relevancia del caso, el primero es que efectivamente se trata de la nulidad de dos actos administrativos diferentes como se demostrará a continuación y el segundo que a título de restablecimiento del derecho lo que solicita en el último de los procesos mencionados es diferente pues el demandante accionante consigno el cálculo del reajuste que reclama y al que tenía derecho desde el año 1997 en adelante.

Esta petición de restablecimiento del derecho cobija el reajuste de las mesadas hasta el momento en que fue presentado el derecho de petición e interpuesta la nueva demanda frente a las cuales opera la prescripción cuatrienal, lo cual denota una diferencia importante con la primera petición como precisamente lo registra la titular del Juzgado 11 Administrativo Oral del circuito judicial de Tunja en el acta de la audiencia inicial del 19 de enero de 2015 dentro del proceso con radicación No. 2014-000403-00, en la que se decidió no analizar este tema por ser accesorio.

Frente al tema de la presunta operancia de la caducidad a manifestar que si bien es cierto el derecho de la asignación de retiro es imprescriptible, es decir, no es susceptible de la prescripción extintiva, las mesadas pensionales no se hayan amparadas por esta imprescriptibilidad, por el contrario subsane en el régimen prescrito cuatrienal.

En el mismo sentido, hizo referencia a la sentencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, expediente No. 11001031500020180158801 del 27 de septiembre de 2018, donde no se configura la cosa juzgada por no existir la identidad de objeto y de causa.

“Por último y en lo referente a la igualdad de causa, adem pretendi, esta no se puede predicar en el caso subexamine en razón a que si bien las pretensiones del actor en ambos procesos se apoyan en las mismas normas, toda vez que en la segunda oportunidad los reclamos son diferentes y ya estaba en práctica un hecho nuevo e importante en materia de reajuste a la asignación de retiro de los exmiembros de la fuerza pública como lo fue en su momento y en la actualidad la política pública de conciliación en materia de reconocimiento del IPC para el año 1997 al 2004 y cuando impactan la base de liquidación de las mesadas que de acuerdo a la prescripción cuatrienal tenían derecho a reclamar el demandante accionante, la Sala estima que para que se declare la existencia de la figura de la cosa juzgada es necesario que se presenten los tres elementos determinantes de la identidad de personas, el sujeto y la causa lo cual no sucede en el presente

caso en el que no se encontró la identidad de objeto ni de causa y en tal virtud no puede predicarse que se haya acaecido la cosa juzgada”.

El artículo 53 de la Constitución Política establece como garantía fundamental en materia laboral el principio de la irrenunciabilidad de los beneficios mínimos establecidos de las normas laborales, el cual refleja el sentido reivindicatorio y proteccionista que para todo trabajador tiene el derecho laboral, de tal forma que las garantías establecidas en su favor no pueden voluntaria ni forzosamente, por mandato legal ser objeto de renuncia, lo anterior explica el carácter de orden público que ostentan las normas que regulan el trabajo humano y el hecho de que los derechos y prerrogativas en ellos reconocidos se sustraigan a los postulados de la autonomía de la voluntad privada, así lo preceptuado por el artículo 14 del Código Sustantivo de Trabajo al señalar que: “las disposiciones legales que regulan el trabajo humano son de orden público y por consiguiente los derechos y prerrogativas de ellas conceden son irrenunciables”.

Solicitó revocar la decisión recurrida.

V. CONSIDERACIONES:

5.1. PROBLEMA JURÍDICO

El asunto que se discute, se contrae a establecer si es procedente o no declarar probada la excepción de cosa juzgada y la terminación del proceso?

5.2. TESIS

Se confirmará la providencia recurrida, como quiera que del análisis de las pruebas obrantes en el proceso y la jurisprudencia acerca del tema, se configuró el fenómeno de la cosa juzgada, toda vez que existe identidad de partes, objeto y causa petendi.

Para arribar a la anterior decisión, se realizará un recuento normativo y jurisprudencial acerca de la cosa juzgada como causal de rechazo y luego se aplicarán al caso concreto.

5.3. RECUESTO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL ACERCA DE LA COSA JUZGADA:

En reciente providencia del Consejo de Estado² se recordó frente a este tema:

*“21. De manera general y uniforme, la doctrina y la jurisprudencia han considerado la **cosa juzgada** como una cualidad inherente a las sentencias*

² SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “B”, C.P: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ, veintiuno (21) de marzo de dos mil diecinueve (2019), Radicación número: 76001-23-33-000-2017-00451-01(1578-18)

ejecutoriadas, que las hace inmutables, intangibles, inimpugnables y obligatorias, por lo que el asunto decidido no puede variarse en el futuro, constituyendo garantía de seguridad y estabilidad jurídica, pues de lo contrario los conflictos serían interminables e irresolubles, en desmedro no solo de los mencionados principios y valores de todo ordenamiento jurídico, sino de los derechos ciudadanos³.

22. Sobre el particular, el artículo 189, inciso 1º, de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), al regular los efectos de las sentencias en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, precisó también los efectos de la cosa juzgada en los siguientes términos:

«Artículo 189. Efectos de la sentencia. La sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo en un proceso tendrá fuerza de cosa juzgada erga omnes. La que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada erga omnes pero solo en relación con la causa petendi juzgada. Las que declaren la legalidad de las medidas que se revisen en ejercicio del control inmediato de legalidad producirán efectos erga omnes solo en relación con las normas jurídicas superiores frente a las cuales se haga el examen.»

23. La lectura de la norma revela, que la figura de la cosa juzgada está atada a los efectos de la sentencia, por lo que si en ésta, se declara la nulidad de un acto administrativo, dicha determinación genera la cosa juzgada de manera general y para todos, esto es, erga omnes.

24. Mientras que, si en la sentencia se niegan las pretensiones de nulidad de un acto administrativo, se produce el fenómeno de la cosa juzgada pero únicamente en lo que atañe a la causa petendi⁴, es decir, en lo que se refiere a los argumentos o motivos alegados en la demanda resuelta como sustento de la pretensión.

25. Así lo ha precisado la jurisprudencia de la subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación en fallo de 28 de febrero de 2013⁵ con ponencia del Consejero Gustavo Gómez Aranguren, en donde se señaló:

«...la sentencia que niega la anulación del acto acusado produce el efecto de cosa juzgada frente a todos, pero sólo en relación con la causa o los motivos de impugnación alegados, lo que significa que por esos mismos motivos no podrá instaurar la misma parte o un tercero una nueva acción de nulidad contra el acto que fue objeto de la primera decisión.

Pero en cambio, la sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo tiene fuerza de cosa juzgada erga omnes (para todo el mundo y sin importar la causa petendi o los argumentos alegados), situación que impide que pueda presentarse un nuevo pronunciamiento en relación con el acto acusado.»

26. Ahora bien, en materia de cosa juzgada, el artículo 189 de la Ley 1437 de 2011 se complementa con lo dispuesto por el 303, inciso 1º, del Código

³ Sección Segunda Subsección "B" C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez de 6 de julio de dos mil diecisiete (2017). Radicación número: 25000-23-42-000-2015-03267-01(4406-16).

⁴ Según CABANELLAS, Guillermo, por «causa petendi» se entiende el «fundamento de la petición». Véase su libro «REPERTORIO Jurídico de principios generales del derecho, locuciones, máximas y aforismos latinos y castellanos». Editorial Eliasta. 4ª Edición Ampliada. Buenos Aires, Argentina. 2003. Pág. 209.

⁵ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 28 de febrero de 2013, con ponencia del Consejero Gustavo Gómez Aranguren, en el expediente 2229-2007, actora: Luz Beatriz Pedraza Bernal.

General del Proceso, aplicable a los procesos contencioso administrativos por remisión expresa del artículo 306 del CPACA. El referido artículo 303, precisa sobre el particular lo siguiente:

«La sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada, siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior, y entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes».

27. Según la norma leída, para que una decisión alcance el valor de cosa juzgada se requiere:

- i. **Identidad de partes**, es decir, al proceso deben concurrir las mismas partes e intervinientes que resultaron vinculados y obligados por la decisión que constituye cosa juzgada.
- ii. **Identidad de causa petendi**, es decir, la demanda y la decisión que hizo tránsito a cosa juzgada deben tener los mismos fundamentos de hecho y de derecho como sustento.
- iii. **Identidad de objeto**, es decir, la demanda debe versar sobre la misma pretensión sobre la cual se predica la cosa juzgada".

Así las cosas, para que una decisión alcance el valor de cosa juzgada se requiere la configuración de los siguientes requisitos: (i) identidad de objeto, es decir, la demanda debe versar sobre la misma pretensión, es decir, sobre el mismo derecho o relación jurídica sobre la cual se predica la cosa juzgada; (ii) identidad de causa petendi, esto es que la demanda y la decisión que hizo tránsito a cosa juzgada deben tener los mismos fundamentos de hecho o sustento fáctico de la nueva demanda que se promueve; (iii) identidad de partes, al proceso deben concurrir las mismas partes e intervinientes que resultaron vinculadas y obligadas por la decisión que constituye cosa juzgada.

Como se vio en el cuadro normativo y jurisprudencial, los elementos para la determinación de la eficacia de la cosa juzgada se contraen a los sujetos que intervienen en el proceso, la cosa u objeto sobre el cual recaen las pretensiones de la demanda y la causa invocada para sustentar dichas pretensiones⁶.

El Consejo de Estado - Sección Segunda – Subsección A⁷, frente a la definición de la cosa juzgada señaló: "... la fuerza que el derecho atribuye normalmente a los resultados procesales. Esta fuerza se traduce en un necesario respeto y subordinación a lo dicho y hecho en el proceso. El proceso, en virtud de la figura de la cosa juzgada, se hace inatacable, y cosa juzgada no quiera decir, en sustancia, sino inatacabilidad de lo que en el proceso se ha conseguido".⁸

Además, se indicó que el concepto de cosa juzgada hace referencia al "carácter imperativo e inmutable de las decisiones que han adquirido firmeza, lo cual implica de

⁶ Consejo de Estado, Sección Segunda, auto 03 de marzo de 2016, expediente: 05001-23-33-000-2013-00323-01 (0578-2014) y auto de 15 de febrero de 2018 expediente: 25000-23-42-000-2013-01520-01 (3199-2015) CP William Hernández Gómez.

⁷ Radicado 76001-23-33-000-2012-00207-02(3485-17), C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.

⁸ Derecho Procesal Civil, 4ª Edición 1998, revisada y adaptada por Pedro Aragonese, profesor emérito de Derecho Procesal de la Universidad Complutense de Madrid.

suyo la imposibilidad de volver sobre asuntos ya juzgados”, para introducir en ellos variaciones o modificaciones mediante la adopción de una nueva providencia. En consecuencia, es posible predicar la existencia del fenómeno de la cosa juzgada, cuando llega al conocimiento de la jurisdicción un nuevo proceso con identidad jurídica de partes, causa y objeto.⁹

De igual forma, puso de presente que la estructuración de la cosa juzgada requiere de la conjunción de los siguientes elementos:

“Identidad de partes: es decir, que se trate de unas mismas personas que figuren como sujetos pasivo y activo de la acción.

Identidad de objeto: que las pretensiones reclamadas en el nuevo proceso correspondan a las mismas que integraban el petitum del primero en donde se dictó el fallo.

Identidad de causa: Cuando el motivo o razón que sirvió de fundamento a la primera demanda, se invoque nuevamente en una segunda.”

5.4. CASO CONCRETO

De conformidad con el artículo 328¹⁰ del C.G.P, aplicable por remisión expresa del artículo 306¹¹ del CPACA, se procederá a resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandante, pronunciándose solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso interpuesto.

Consideró el apelante en síntesis que no se configura la cosa juzgada, argumentando que no existe identidad de objeto ni de causa, toda vez que los actos administrativos acusados son similares mas no iguales, puesto que las pretensiones reclamadas en el proceso anterior, se referían a la reliquidación de la asignación de retiro conforme al IPC desde el año 1997 hasta el 2006 y en el presente asunto lo que se pide es la reliquidación con base en el IPC desde el año 2003 hasta la fecha de su cumplimiento, para lo cual citó diferentes providencias del Consejo de Estado.

⁹ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 5 de marzo de 2009, rad.: 11001-03-24-000-2004-00262-01, M.P. Rafael Ostau de Lafont P, reiterada en sentencia de la Sección Tercera, Subsección A, del 24 de marzo de 2011, M.P. Olga Mérida Valle de La Hoz, expediente 34396. Sentencia de la Sección Tercera, Subsección B, del 24 de mayo de 2012, expediente 23221, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.

¹⁰ ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.

El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.

En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.

¹¹ ARTÍCULO 306. ASPECTOS NO REGULADOS. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.



Según los supuestos fácticos acreditados en el presente proceso, se realiza el siguiente paralelo para fines ilustrativos de ambos procesos:

PROCESO ANTERIOR RAD. 2008-00385-00	PROCESO ACTUAL RAD. 2017-00001-01
PARTES (Folio 15 pág. 20 C.D.) DEMANDANTE: MIGUEL ANGEL AVELLANEDA VEGA DEMANDADO: CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES - CREMIL	PARTES: (Folio 21) DEMANDANTE: MIGUEL ANGEL AVELLANEDA VEGA DEMANDADO: CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES - CREMIL
IDENTIDAD DE OBJETO PRETENSIONES: (Folios 15 a 18; pág. 20 a 23 C.D.) <ol style="list-style-type: none">1. Que se declare la nulidad del Oficio No. 48929 del 18 de diciembre de 2007, proferido por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares – CREMIL que emite respuesta al oficio radicado No. 66666 del 03 de octubre de 2007, negando el reconocimiento, liquidación y pago del reajuste de la asignación de retiro y el pago de los dineros retroactivos, resultantes de la diferencia económica dejada de pagar, con su respectiva indexación, que en derecho corresponde, existente entre lo pagado y lo dejado de pagar a mi poderdante, en virtud a los aumentos decretados por el Gobierno Nacional, que debían hacerse en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del año inmediatamente anterior por los años 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006 respectivamente, según se indica en dicho oficio.2. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones y a manera de restablecimiento del derecho, se condene a la CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES, al pago de las sumas dejadas de cancelar por concepto de reajuste en la asignación de retiro del actor, en el porcentaje real que corresponde al Índice de Precios al Consumidor (IPC), decretado por el Gobierno Nacional para el año 1996 y al pago de los retroactivos de las sumas dineradas, con su correspondiente indexación, resultantes entre la diferencia del pago realizado por la accionada en el año de 1997, frente al valor real, que resulta de multiplicar su salario por el porcentaje decretado por el Gobierno Nacional, de acuerdo al índice de Precios al Consumidor (IPC), para el año 1996, o sea el 21.63%.3. Como restablecimiento del derecho, se condene a la CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES, al pago de las sumas dejadas de percibir por concepto de reajuste en la asignación de retiro del actor, en el porcentaje real decretado por el Gobierno Nacional de acuerdo al índice de Precios al Consumidor (IPC), para el año 1997 y al pago	IDENTIDAD DE OBJETO PRETENSIONES: (Folios 21 a 22) <ol style="list-style-type: none">1. Que se declare la nulidad del Oficio CREMIL 80843 consecutivo 2016-64351 del 27 de septiembre de 2016, proferido por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares – CREMIL, que negó la petición de reajuste y actualización de su asignación de retiro, así como el pago de las sumas de dinero dejadas de cancelar por la entidad, al no haber realizado el reajuste anual de la asignación de retiro de los años 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 y hasta septiembre de 2003, conforme lo establece la constitución Política de Colombia en el artículo 48 inciso 6 y el artículo 53 inciso 3, desarrollados por el artículo 14 de la Ley 100 de 1993 y la Ley 238 de 1995.2. Que una vez se profiera la nulidad de los actos administrativos acusados, con el fin de asegurar así la regularidad jurídica, se de protección directa al derecho subjetivo vulnerado o desconocido a mi representada: condenando a la CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES, a reparar los perjuicios causados por el acto administrativo anulado, a favor del señor MIGUEL ANGEL AVELLANEDA VEGA, en la siguiente forma: Reconociendo el valor de las sumas de dinero dejadas de cancelar por parte de la CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES, en los años 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. hasta septiembre de 2003 por aplicación del artículo 14 de la ley 100 de 1993 y este resultado como base para la liquidación de los aumentos a partir del 03 de octubre de 2003 hasta el 31 de diciembre de 2004 de acuerdo al IPC y a partir del 1 de enero de 2005 y años subsiguientes a saber 2006, 2007, 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016 y 2017 donde se aplica el Decreto 4433 de 2004 por no haber realizado 'CREMIL' el reajuste anual de la asignación de retiro pensión del señor MIGUEL ANGEL AVELLANEDA VEGA, aplicando la prescripción cuatrienal que dispone el artículo 174 del decreto 1211 de 1990. ósea con obligación efectiva a pagar a partir del 19 de septiembre de 2012 en razón al derecho de petición presentado el 19 de septiembre de 2016, más la indexación de estas



de los retroactivos de las sumas dinerarias, con su correspondiente indexación, resultantes entre la diferencia del pago realizado por la accionada para 1998, frente al valor real que resulte de multiplicar su salario por el porcentaje decretado por el Gobierno Nacional de acuerdo al índice de Precios al Consumidor (IPC) para el año 1997.

4. Como restablecimiento del derecho, se condene a la CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES, al pago de las sumas dejadas de percibir por concepto de reajuste en la asignación de retiro del actor, en el porcentaje real decretado por el Gobierno Nacional de acuerdo al índice de Precios al Consumidor (IPC) para el año 1998 y al pago de los retroactivos de las sumas dinerarias, con su correspondiente indexación, resultantes entre la diferencia del pago realizado por la accionada para 1999 frente al valor real que resulte de multiplicar su salario por el porcentaje decretado por el Gobierno Nacional de acuerdo al índice de Precios al Consumidor (IPC) para el año 1998, o sea el 16.70%.
5. Como restablecimiento del derecho, se condene a la CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES, al pago de las sumas dejadas de percibir por concepto de reajuste en la asignación de retiro del actor, en el porcentaje real decretado por el Gobierno Nacional de acuerdo al índice de Precios al Consumidor (IPC) para el año 1999 y al pago de los retroactivos de las sumas dinerarias, con su correspondiente indexación, resultantes entre la diferencia del pago realizado por la accionada para 2000 frente al valor real que resulte de multiplicar su salario por el porcentaje decretado por el Gobierno Nacional de acuerdo al índice de Precios al Consumidor (IPC) para el año 1999, o sea del 9.23%.
6. Como restablecimiento del derecho, se condene a la CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES, al pago de las sumas dejadas de percibir por concepto de reajuste en la asignación de retiro del actor, en el porcentaje real decretado por el Gobierno Nacional de acuerdo al índice de Precios al Consumidor (IPC), para el año 2000 y al pago de retroactivos de las sumas dinerarias, con su correspondiente indexación, resultantes entre la diferencia del pago realizado por la accionada para 2001 frente al valor real que resulte de multiplicar su salario por el porcentaje decretado por el Gobierno Nacional de acuerdo al índice de Precios al Consumidor (IPC) para el año 2000, o sea del 8.75%.
7. Como restablecimiento de derecho, se condene a la CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES, al pago de las sumas dejadas de percibir por concepto de reajuste en la asignación de retiro del actor, en el porcentaje real decretado por el Gobierno

sumas de dinero, y los intereses legales, conforme lo establece la Constitución Política de Colombia en el artículo 48 inciso 6° y el artículo 53 inciso 3°, desarrollados por el artículo 14 de la Ley 100 de 1993 y autorizados por la ley 238 de 1995; es decir, tomando como base el mismo valor porcentual que sirvió como incremento al IPC del año inmediatamente anterior.

Las sumas de dineros dejados de cancelar por parte de la CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES VREMU, del señor MIGUEL ANGEL AVELLANEDA VEGA.

El pago de los valores que resulten de realizar los reajustes a la asignación de retiro del señor MIGUEL ANGEL AVELLANEDA VEGA, para los años 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 hasta septiembre de 2003 por aplicación del artículo 14 de la Ley 100 de 1993 y este resultado como base para la liquidación de los aumentos a partir del 01 de octubre de 2003 hasta el 31 de diciembre de 2004 de acuerdo al IPC y a partir del 1 de enero de 2005 y años subsiguientes a saber 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 aplicándole el incremento más favorable entre el aumento salarial porcentual, o el índice de precios al consumidor IPC que se aplica para los reajustes pensionales, o el pago de lo que resulte probado dentro del proceso.

(...)

QUINTA: Condene a la CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES "CREMIL" a reajustar, actualizar y pagar la asignación de retiro mensual del señor MIGUEL ANGEL AVELLANEDA VEGA, al año 2017 para que hacia el futuro se le continúe cancelando la asignación de retiro mensual reajustada. Lo anterior por NO haber realizado la CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES "CREMIL" el reajuste anual de 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, hasta septiembre de 2003 conforme lo establece la Constitución Política de Colombia en el artículo 48 inciso 6° y el artículo 53 inciso 3°, desarrollados por el artículo 14 de la Ley 100 de 1993 y autorizados por la Ley 238 de 1995. Esto es, aplicando al porcentaje de incremento más favorable entre el aumento salarial porcentual, o el Índice de Precios al Consumidor IPC, que se aplica para los reajustes pensionales, o el pago de lo resulte probado dentro del proceso.

(...)



<p>Nacional de acuerdo al índice de Precios al Consumidor (IPC), para el año 2001 y al pago de los retroactivos de las sumas dinerarias, con su correspondiente indexación, resultantes entre la diferencia del pago realizado por la accionada para 2002 frente al valor real que resulte de multiplicar su salario por el porcentaje decretado por el Gobierno Nacional de acuerdo al índice de Precios al Consumidor (IPC) para el año 2001, o sea del 7.16%.</p> <p>8. Como restablecimiento de derecho, se condene a la CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES, al pago de las sumas dejadas de percibir por concepto de reajuste en la asignación de retiro del actor, en el porcentaje real decretado por el Gobierno Nacional de acuerdo al índice de Precios al Consumidor (IPC), para el año 2002 y al pago de los retroactivos de las sumas dinerarias, con su correspondiente indexación, resultantes entre la diferencia del pago realizado por la accionada para 2003 frente al valor real que resulte de multiplicar su salario por el porcentaje decretado por el Gobierno Nacional de acuerdo al índice de Precios al Consumidor (IPC) para el año 2002 o sea del 6.69%.</p> <p>9. Como restablecimiento de derecho, se condene a la CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES, al pago de las sumas dejadas de percibir por concepto de reajuste en la asignación de retiro del actor, en el porcentaje real decretado por el Gobierno Nacional de acuerdo al índice de Precios al Consumidor (IPC), para el año 2003 y al pago de los retroactivos de las sumas dinerarias, con su correspondiente indexación, resultantes entre la diferencia del pago realizado por la accionada para 2004 frente al valor real que resulte de multiplicar su salario por el porcentaje decretado por el Gobierno Nacional de acuerdo al índice de Precios al Consumidor (IPC) para el año 2003, o sea del 6.49%.</p> <p>10. Como restablecimiento de derecho, se condene a la CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES, al pago de las sumas dejadas de percibir por concepto de reajuste en la asignación de retiro del actor, en el porcentaje real decretado por el Gobierno Nacional de acuerdo al índice de Precios al Consumidor (IPC), para el año 2004 y al pago de los retroactivos de las sumas dinerarias, con su correspondiente indexación, resultantes entre la diferencia del pago realizado por la accionada para 2005, frente al valor real que resulte de multiplicar su salario por el porcentaje decretado por el Gobierno Nacional de acuerdo al índice de Precios al Consumidor (IPC) para el año 2004, o sea del 5.5%.</p> <p>11. Que se ordene a la parte demandada se REAJUSTE LA ASIGNACION BASICA MENSUAL DE RETIRO DEL ACTOR, en los porcentajes respectivos para cada año, contenidos en los decretos 122 de 1997, 058 de 1998, 062 de 1999, 2724 del 27 de diciembre de 2000, 0182 del año 2000, 1463 del 2001 (modificado decreto N°2737 del 27 de diciembre del 2001), 745 del año 2002, decreto 3552 del 2003, 4158 del año 2004, a</p>	
--	--



<p>partir del año 1997 y hasta la fecha en que adquiera firmeza la sentencia que ponga fin al presente proceso incorporando año a año los porcentajes establecidos por cada decreto, de manera que cada porcentaje se aplique sobre la base incrementada del año anterior de manera sucesiva.</p> <p>12. 12.. Que se ordene el carácter de factor salarial de los mencionados reajustes, se condene a la CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES, a reconocer liquidar y pagar al actor en forma reajustada, los efectos laborales que pudieron haber sido menoscabados por el no reajuste oportuno de la asignación de retiro, tales como primas, bonificaciones, subsidios y demás derechos de orden prestacional, a partir a partir del año 1997 y hasta la fecha en que adquiera firmeza la sentencia que ponga fin al presente proceso.</p>	
--	--

Conforme a las pruebas obrantes en el plenario y de acuerdo con el cuadro anterior, se tiene que, en cuanto a la identidad de partes, este requisito se cumple, teniendo en cuenta que en ambas demandas funge como demandante el señor Miguel Ángel Avellaneda Vega y como demandado la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares - CREMIL.

Igualmente, existe identidad de causa y objeto, pues en ambos asuntos se pretende el reajuste de la asignación de retiro conforme al IPC desde el año 1997 hasta el 2003.

Por lo anterior, la Sala concluye que le asiste razón al a-quo cuando considera que lo pretendido ya fue objeto de estudio y resuelto en sede jurisdiccional, advirtiéndose en aquella ocasión que el mencionado periodo se encuentra prescrito.

Así las cosas, es claro que como el fenómeno de la cosa juzgada hace referencia al carácter imperativo e inmutable de las decisiones que han adquirido firmeza, ello implica como consecuencia, la imposibilidad de volver sobre asuntos ya juzgados, para introducir en ellos variaciones o modificaciones mediante la adopción de una nueva providencia.

El Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B, C.P. CÉSAR PALOMINO CORTÉS, del 11 de abril de 2018¹², recordó que en casos como este, el asunto no es susceptible de control judicial y por tanto opera el rechazo de la demanda, en los siguientes términos:

“Así pues, en el caso sub júdice, el objeto de la demanda (las pretensiones) son las mismas que la demandante invocó en un proceso judicial que se surtió desde el año 2011, y las partes de la relación procesal y los fundamentos de derechos esbozados (causa petendi) son los mismos que en su momento sirvieron de sustento ante esta jurisdicción; por ello, le asiste razón al Tribunal Administrativo de Santander, puesto que no es pertinente iniciar un nuevo debate judicial respecto de una situación conocida con anterioridad, por cuanto ya se dictaron

¹² Radicación número: 68001-23-33-000-2016-01191-01(3472-17)



dos providencias, en las que se resolvió la solicitud elevada por la señora Manrique Parra respecto si le asistía o no el derecho a la prima técnica otorgada por la Contraloría General de la República¹³.

La Sala observa que el Tribunal Administrativo de Santander obró en debida forma al rechazar la demanda del epígrafe, toda vez que dicho acto no podrá ser controvertido en sede jurisdiccional, puesto que en su momento, la situación fáctica planteada en la demanda ya fue conocida por esta jurisdicción, configurándose sobre la misma el fenómeno de la cosa juzgada; en consecuencia, la Sala confirmará el auto de 20 de enero de 2017 proferido por el Tribunal Administrativo de Santander (...) (Negrillas y subrayas por fuera de texto).

Por lo que se confirmará el auto apelado, como quiera que se configura la causal establecida en el numeral 3 del artículo 169 del CPACA, toda vez que el asunto no es susceptible de control judicial.

En consecuencia; se,

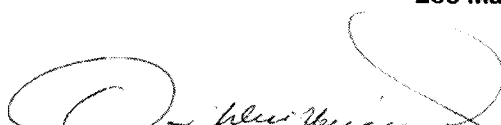
RESUELVE:

PRIMERO.- CONFIRMAR el auto interlocutorio No. 576 del 05 de septiembre de 2019, proferido por el Juzgado 11 Administrativo Oral de Cali, mediante el cual se declaró probada la excepción de cosa juzgada, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO.- Una vez ejecutoriada esta providencia, **DEVUÉLVASE** el expediente al Juzgado de Origen, cancélese su radicación y sin costas en esta instancia.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE,

Los Magistrados,


OSCAR SILVIO NARVÁEZ DAZA


EDUARDO ANTONIO LUBO BARROS


OMAR EDGAR BORJA SOTO

¹³ Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 12 de diciembre de 2005, M.P. Ruth Stella Correa Palacio. "(...) Las sentencias dictadas por los funcionarios judiciales, con el fin de garantizar el orden, la justicia y la seguridad jurídica, tienen las características de ser imperativas, siendo susceptibles de cumplirse coercitivamente y convirtiéndose a las postre en inmutables, garantizándole a los ciudadanos la protección de sus derechos. La cosa juzgada tiene unos efectos importantes, los cuales pueden resumirse así: i. Impide la posibilidad de volver a plantear las mismas pretensiones ante la autoridad judicial. ii. La sentencia ejecutoriada - cosa juzgada formal - frente a la cual no existe posibilidad de impugnación - cosa juzgada material - no puede ser modificada adquiriendo la característica de la inmutabilidad. iii. La prestación impuesta a cargo de una de las partes en la sentencia puede hacerse cumplir coercitivamente. En este orden de ideas, se presenta cosa juzgada, adquiriendo esta figura jurídica toda la importancia que la reviste, cuando llega al conocimiento de la jurisdicción un nuevo proceso con identidad jurídica de partes, causa e igual objeto al ya resuelto por los funcionarios judiciales. (...)”